

luca que lo consignó al servicio de las armas en el ejército federal.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que forman el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 13 de Agosto de 1878.—*Lic. Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por Don Ramon O. Felid, en representacion de su padre D. Hermenegildo, contra la orden de embargo en bienes del quejoso, que libró la oficina de Contribuciones de ese Estado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Ramon O. Felid, en representacion de su padre D. Hermenegildo, ha interpuesto el recurso de amparo, por exigírsele el pago de contribuciones por las autoridades del Estado, que en su concepto no son competentes, por irregularidades habidas en las elecciones respectivas.

De las pruebas rendidas por el quejoso aparece; primero: que el actual Congreso se instaló con siete Diputados, entre los que

figuran D. Jesus Córdova y D. Ramon Quetzada por el Distrito de Amealco. Segundo: que en el Congreso anterior figuraron de Diputados, tambien por Amealco, D. Juan N. Rubio y D. Eleuterio Frias y Soto. Tercero: que el nombramiento de dos Diputados para el presente Congreso, no podía haberse hecho por el mismo Distrito (artículos 35 y 36 de la Constitucion del Estado). En consecuencia, la Legislatura actual se instaló sin *quorum*, porque de los siete individuos que la formaron primitivamente, uno al menos no era Diputado.

Como el artículo 16 de la Constitucion federal prevenga que nadie pueda ser molestado sino en virtud de mandamiento escrito por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; resulta de allí, que en concepto de Felid la Legislatura no puede imponer contribuciones por faltarle el carácter de autoridad competente para ello.

Consta de autos, que la Legislatura actualmente se compone de trece miembros, habiéndose instalado con siete, indispensables para formar *quorum* (artículo 42 de la Constitucion del Estado). Tambien consta, que el actual Vice-Gobernador del Estado, en ejercicio del Poder Ejecutivo, fué electo popularmente, sin tener para ello impedimento constitucional, como el C. Julio M. Cervantes, cuya permanencia en el Gobierno, es incompatible con la Carta local. Para tomar en consideracion el raciocinio que se hace para demostrar que los Diputados electos por Amealco, no tienen carácter legal, sería indispensable volver á decidir un punto ya resuelto por la Legislatura del Estado erigida en colegio electoral, única autoridad á quien corresponde resolver las dudas que pudieran ofrecerse sobre las elecciones de sus miembros.

Esto supuesto, presentándose ante V. un punto decidido por la autoridad competente; y que excede los límites de la competencia de los Tribunales federales, es claro que este Juzgado debe abstenerse de conocer;

pues que siendo la competencia de órden público y afectando inmediatamente la organización social, no puede introducirse la confusión en poderes tan distintos como lo son el Legislativo y el Judicial. La separación de estos, pertenece al órden constitucional. Nadie puede derogar este órden, y es por lo mismo evidente, que ni el uno ni el otro puede permitir, ni autorizar, lo que en derecho administrativo se llama, "la derogación del órden de las jurisdicciones."

Lo que los artículos 101 y 102 de la Constitución ponen bajo la salvaguardia de las autoridades federales, es la libertad civil, y no en todo evento, sino cuando es violada por una autoridad cualquiera. Y como esta libertad no haya sido atacada con el hecho de imponer contribuciones, resulta que no hay lugar al amparo solicitado.

Si como dice el quejoso, la Legislatura no es autoridad, se deduce de allí que no puede ser autoridad competente ni incompetente conforme al tan sabido axioma: *prius est esse quam taliter esse*.

Si pues lo que en realidad se reclama no es el acto de imponer contribuciones, sino el de la instalación de la Legislatura, es preciso convenir, en que este no es reclamable por la vía de amparo, sino por el procedimiento directo contra los que se hayan arrogado el poder público del Estado, conforme á lo prevenido en la ley de 6 de Diciembre de 1856: siempre que en dicho acto se hayan violado las reglas del órden constitucional, que no es otro que el órden público.

Perturbaciones como la que sufre el Estado, no son nuevas en la historia de los Gobiernos; y refiriéndose á ellas, dice un jurisconsulto inglés: "En estos ó en otros casos que puede preveer una imaginación fecunda, pucato que ni la historia ni la ley han hablado, conviene que nosotros guardemos el mismo silencio; abandonando á los contemporáneos, cuando la necesidad y la salud de todos lo exijan, el desenvolvimiento del poder inherente á las sociedades, que es evidente que ni el clima, ni el tiempo,

"ni las leyes, ni los contratos pueden destruir ó disminuir" (Blackstone, Coment. libro primero, capítulo sétimo.)

Hay actualmente un cuñado y circunspección visibles, dice un publicista moderno, en la conducta de las Naciones, resultado de la reflexión que inspira el siglo, que las detiene cuando se hallan á punto de precipitarse demasiado pronto, é impiden así muchos daños. Sin embargo, siempre que las Legislaturas de los Estados Americanos, obrando sobre la supuesta voluntad del pueblo, han traicionado la confianza depositada en ellas y expedido leyes que infringían las grandes reglas de la justicia: invariablemente este abuso ha tenido por consecuencia desgracias de uno ú otro género..... Así, mientras mas completo sea el establecimiento de las instituciones libres, mayor es la probabilidad de que sean sostenidas las leyes justas, y de que se conserve la tranquilidad pública; porque los intereses de cada uno vienen á ser mas idénticos con los intereses de todos.

Pero hay que distinguir entre un pueblo que tiene á la vez carácter democrático é instituciones democráticas, y otro que solo tiene opiniones democráticas. El último puede precipitarse de cabeza, en toda clase de exesos, y con dificultad escapará de la mas dura tiranía. El primero está protegido contra estas calamidades, porque es la capacidad de ser libre y no la posesión de la libertad que puede efectuar una distribución ventajosa del poder político de la comunidad. La una era la condicion de la Francia durante la revolución; la otra es la de los Estados Unidos, (Grimke, Instituciones libres, libro segundo, capítulo tercero). No es por lo mismo extraño que Tácito nos haya dicho, que es mas fácil elogiar, que poner en ejercicio un Gobierno mixto; terminando con predecir, que una vez establecido no podría durar largo tiempo. *Cunctas nationes et urbes populus, aut primores, aut singuli regunt. Delecta ex his et constituta reipublice forma laudari facilius quam eveni-*

re, vel si evenit, haud diuturna esse potest." Ann. libro cuarto. Mas en la época de este grande historiador Romano, no se había descubierto el principio de la representación.

Todo esto prueba, que cuando se provocan situaciones semejantes á la desgraciadísima que hoy guarda el Estado de Querétaro por medio de la usurpacion aparente legal del poder público, no se atacan los derechos absolutos de los individuos, sino los colectivos de un pueblo entero, cuya representación se ha usurpado. Y estos últimos, siendo meramente políticos, son esencialmente distintos de los derechos del hombre, únicos reclamables, como se ha dicho, por la vía de juicios especiales, como el presente.

Por lo expuesto, el Promotor fiscal pide: se niegue el amparo solicitado.

Querétaro, 28 de Febrero de 1873.—*Luis Castañeda.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Querétaro, Marzo 6 de 1873. Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Ramon O. Feliú como apoderado del Sr. su padre D. Hermenegildo del mismo apellido; el acto de suspension de fojas...; el informe rendido por la autoridad ejecutora; lo expuesto por el fiscal al contestar el traslado; las pruebas rendidas; los alegatos de las partes; la citacion para sentencia y todo cuanto verse y tenerse presente convino;

Considerando: que el amparo promovido por el C. Ramon O. Feliú en representación del señor su padre D. Hermenegildo del mismo apellido, lo funda en el artículo 16 de la Constitución general de la República, creyendo el quejoso que con la orden de embargo contra sus bienes se le ataca la garantía que el citado artículo le concede, por no ser autoridades competentes en el Estado las que lo componen, ya para dar la ley que constituya sus fondos, ya para publicarla; ya tambien para llevarla á efecto (escrito de fojas 2;)

Considerando: que para que las contribuciones tengan el título de tales y llenen su objeto, es necesario se llenen tambien los requisitos establecidos por la Constitución y las leyes, lo cual ha faltado en el Estado, por que los cargos que gravitan sobre los ciudadanos no son impuestos por los que tienen facultad para ello, atenta la legalidad de la legislatura que expidió la ley hacendaria, la carencia de facultades en el que publicó dicha ley y la incapacidad del recaudador de rentas para llevarla á efecto, como plenamente ha probado la parte actora con seis testigos mayores de toda excepcion, que uniformes declaran: que la legislatura se instaló con siete diputados entre los cuales figuraron dos del Distrito de Amealco; que por lo mismo, uno es ilegal en virtud de la facultad de alternar que el artículo 36 fojas 5 de la Constitución dá á los distritos, no habiendo habido por lo mismo el quorum que dicha Constitución exige para que esa corporacion pudiera abrir sus sesiones y ejercer su encargo, segun el artículo 41 fojas citadas, no siendo por lo mismo legislatura la reunion de los seis ciudadanos que se instalaron, así como tampoco la que hoy figura con trece, porque los nuevamente nombrados han recibido el vicio de los primeros. Qué en cuanto á la carencia de las facultades del ejecutivo para publicar la ley de hacienda, tambien está probada, por que el C. Ignacio Castro que funge de Vice gobernador recibió su nombramiento de tal por un decreto de la misma Legislatura ilegal, y cuyo decreto se publicó por el C. Francisco Bustamante, quien á su vez se encargó del poder interinamente, con los mismos vicios de ilegalidad por su origen en cuanto á la legislatura y por la publicacion del decreto por el C. Julio M. Cervantes que no podia ser gobernador, por la prohibicion que le dan los artículos 77 y 80 de la referida Constitución local; todo lo cual se ve en las copias certificadas de los decretos constantes en las fojas de 7 á 9.

Considerando, conforme con lo actuado: que en este Estado se ha faltado á los preceptos constitucionales adoptados por toda la nacion, es decir: al pacto federativo sobre que los Estados deben tener en su régimen interior la forma de Gobierno *representativo, popular, federal*, por no ser el pueblo el que ha elegido los poderes que realmente han sido usurpados por los que los representan, como lo dice el C. Promotor fiscal al concluir su alegato de buena prueba, con estas palabras: *Todo esto prueba, que cuando se provocan situaciones semejantes á la desgraciadísima que hoy guarda el Estado de Querétaro por medio de la usurpacion aparentemente legal del poder público.* Que en virtud de esa inegable usurpacion se ha violado el art. 109 de la Constitucion, y con éste todos los artículos que ven á la garantia individual, lo cual se conoce sin necesidad de mucho esfuerzo.

Considerando: que el art. 40 objetado por el C. Promotor interino en su informe de fojas 13 á 15, es inconducente, porque si bien es cierto que dicho artículo concede á los Estados libertad y soberanía en su régimen interior, tambien lo es que esta libertad y soberanía queda sujeta á los principios de la Constitucion misma, y de facto el prescitado artículo está restringido por el 109 citado, que faculta á los pueblos para que elijan libremente sus poderes.

Considerando, en cuanto á la incompetencia objetada á los poderes legislativo y ejecutivo: que conforme á nuestras instituciones, siendo la jurisdiccion el poder natural ó conferido para conocer ó determinar sus asuntos relativos á las funciones de cada poder, la competencia no es mas que la medida de ese poder y la incompetencia se refiere necesariamente á lo que está fuera de esa medida. Que por lo mismo, toda incompetencia consiste esencial y originariamente, en una falta de poder; que esa falta en las autoridades, es mas ó menos general, absoluta ó nula, como puede observarse, primero, en las autoridades legítimamente

establecidas, para ciertos y determinados negocios, y segundo, en las autoridades de hecho que no tienen poder alguno, cuya competencia es nula ó incompetencia absoluta. Que encontrándose en este segundo caso el legislativo y ejecutivo del Estado por la falta de poder ó *incompetencia objetada*, debe considerarse comprendida en el art. 16 de la Constitucion, puesto que esta no hace distincion ni escepcion alguna.

Considerando: que para no dejar violada una garantia individual ni infringido un precepto Constitucional, es preciso entrar en el examen de si los que componen los poderes referidos fueron bien nombrados bajo el punto de vista de la Constitucion federal y la del Estado, que no puede ser opuesta á aquella conforme al art. 41; advirtiéndose, que estos conceptos han sido dados ya para casos semejantes por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, con objeto de no sacrificar los derechos del hombre que son el fin á las instituciones que es el medio, segun el artículo primero de la Constitucion.

Considerando: que no se trata de calificar si las elecciones de los que componen los poderes del Estado fueron bien ó mal hechas, sino de si hubo ó no elecciones, conforme á los preceptos constitucionales; ó mejor dicho, si los que fungen de autoridades lo son realmente, cuyo acto, en lugar de restringir la soberanía de los Estados, se las concede con mas amplitud, pues que así se observará cumplidamente el artículo 109 de la carta federal, tan esencial á los pueblos.

Considerando: que aunque las contribuciones son unos impuestos que obligan á todos los ciudadanos para el sostenimiento de la sociedad; sin embargo, éstas deben erigirse ó imponerse por autoridades legítimas, lo que no sucede en el caso, porque ni la ley que impone las contribuciones tiene fuerza de tal, ni el que exige su cumplimiento tiene facultades para ello, por cuya razon el C. Ramon Felú como represen-

tanto de su padre, no está obligado al pago de dichas contribuciones; y de lo contrario se le atacaría la garantía del artículo 16 ya expresado de la Constitución de la República.

Considerando, en cuanto á si la legislatura se instaló con el quorum debido y el ejecutivo fué electo constitucionalmente: que ni la parte del Promotor fiscal, ni la autoridad ejecutora han presentado prueba alguna, que acredite la legalidad de los poderes, y ántes por el contrario, la Legislatura se negó á remitir los documentos que se le pidieron á solicitud de parte, segun la constancia del escribano de fojas veintiuno; y así la parte quejosa lo ha hecho con los testigos aducidos y documentos constantes en el expediente, y prueba: primero, que la Legislatura se instaló sin quorum; no pudiendo, por lo mismo, abrir sus sesiones ni ejercer su encargo, artículo cuarenta y uno de la Constitución local; segundo, que el Vicegobernador encargado del poder ejecutivo, no lo es realmente, por haber hecho la declaración de tal la Legislatura ilegítima, y hecho la publicación del decreto el gobernador interino que adolecía del mismo vicio de ilegalidad que el C. Julio M. Cervantes que publicó el decreto de aquel, segun se vé en la copia certificada de fojas siete.

Por las razones y fundamentos expuestos y con apoyo en los artículos 16, 101, 102 y 109 de la Constitución federal, y en la ley de 20 de Enero de 1869, fallo: que la justicia federal ampara y protege al C. Ramon O. Feliú, como representante del señor su padre, contra la órden de embargo expedida por el que funge de recaudador de rentas de este Estado. Repóngase en papel del sello correspondiente, el que se usó del comun, para no suspender la secuela de este juicio. Hágase saber; sáquense copias de esta sentencia para que se publiquen en el «Diario Oficial» y «Semanario Judicial», y remítase esto expediente á la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así definitivamente juzgando, lo mandó y

firmó el ciudadano juez, primer suplente de Distrito, Lic. Mariano Pimentel. Dey fé.—
Mariano Pimentel.—Francisco Ruiz.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia

México, Junio 26 de 1878. Visto este juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Querétaro por el C. Ramon O. Feliú en representación de su padre D. Hermenegildo del mismo apellido, contra la órden de embargo librada por la oficina recaudadora de contribuciones del Estado de Querétaro para el cobro del primer tercio de contribuciones del corriente año; con cuyo acto creo el quejoso que se viola la garantía á que se refiere el artículo 16 de la Constitución federal, en virtud de haber sido expedidos los decretos que establecen las contribuciones, por el Gobernador y la Legislatura de dicho Estado que no ejercían autoridad legítima; y considerando: que los quejosos alegan como causas de ilegitimidad respecto de la Legislatura, que se instaló sin que hubiese el número de Diputados necesario para formar *quorum*, y respecto del Gobernador, que el C. Julio M. Cervantes, fué declarado Gobernador contra lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución del Estado, que prohíbe la reelección; y que á este punto debe limitarse la del amparo solicitado: que la Legislatura se instaló con siete diputados, número que forma el *quorum* de ella: que en las elecciones de diputados por el Distrito de Amealco, hubo vicios, constando que realmente fueron electos por tal Distrito; solo á la Legislatura del Estado toca, como cuerpo electoral, calificar y apreciar estos vicios; que al hacerse la declaración de Gobernador, la Legislatura infringió el artículo 77 de la Constitución del Estado: esta infracción por si sola no puede ser objeto de amparo de garantías, sino de apreciaciones de la misma Legislatura como cuerpo electoral.

Por todas estas consideraciones y de acuerdo con lo prevenido en el artículo primero de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: primero, que es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito de Querétaro que amparó al quejoso. Segundo: la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Ramon Feliú como representante del Sr. su padre D. Hermenegildo, contra la órden de embargo expedida por el recaudador de rentas del Estado de Querétaro, para el cobro del primer tercio de contribuciones del corriente año.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pebro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 9 de 1873. — *Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

De garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por los CC. Clemente Camacho, Manuel Carbajal y otros, contra los decretos de contribuciones de ese Estado de 24 de Febrero y 22 de Mayo de 1872.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el presente recurso de amparo se ha introducido por los CC. Clemente Camacho, Manuel Carbajal, Mateo y Abundio Ramirez, Demetrio Aguilar, José de Jesus Monzalve, José Dolores Rodriguez, Leandro Beltran y Lic. José M. Burgos, contra los decretos de 24 de Febrero y 22 de Mayo de 1872, que establecen varias contribuciones, y han sido expedidos por D. Julio M. Cervantes. Reputan los quejosos violada la garantía que otorga el artículo 16 del Código fundamental, para no ser molestados sino por mandamiento de autoridad competente. Y como falta en el caso la autoridad, es nula la competencia. Esta falta de autoridad la apoyan, primero: en que la legislatura se instaló con siete miembros, que formaron aparente y no realmente *quorum*, por no ser diputados los CC. Córdova y Quesada electos por el Distrito de Amealco; segundo: en que habiendo figurado en el anterior Congreso, como diputados del mismo Distrito, los CC. Juan N. Rubio y Eleuterio Frias y Soto; no se pudo repetir la eleccion en el bienio actual en favor de los predichos Córdova y Quesada; que por lo mismo, y como se ha dicho, no son diputados conforme á los artículos 35 y 36 de la Carta local.

En cuanto á D. Julio M. Cervantes, le obstan de lleno los artículos 77 y 80 de la Constitución del Estado, para ser gobernador constitucional de Querétaro.